

I

De acuerdo con las competencias de este Agencia, el presente informe se emite atendiendo exclusivamente al ámbito de la protección de datos personales, para lo que deberá estarse a lo dispuesto en el RGPD, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

El RGPD extiende su protección, tal y como establece su artículo 1.2, a los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales, definidos en su artículo 4.1 como *“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.”*

Por su parte, el artículo 4.1 define “tratamiento” como *“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”*.

Por lo tanto, la inclusión, conservación, modificación, acceso de terceros y cesión (entre otros posibles tratamientos) de la información obrante en el Registro Público Concursal regulado por la norma cuyo proyecto se informa constituyen tratamientos de datos de carácter personal, cuando se refieren a personas físicas identificadas o identificables, por lo que se someterá a lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDGDD.

II

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto el desarrollo del reglamento de la Administración Concursal, cuyo núcleo está regulado en la actualidad en el Capítulo II del Título II del Libro I del texto refundido de la Ley

Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, (TRLR), a través de una evolución legislativa que va desde la aprobación de la anterior ley 22/2003, de 9 de julio Concursal, pasando por la ley 17/2014, de 30 de septiembre y la ley 16/2022, de 5 de septiembre, expuesta dicha evolución de manera muy acertada en la memoria de análisis normativo del proyecto (MAIN). Los ejes de dicha evolución, hasta llegar a la actualidad, y lo que se pretende desarrollar, lo constituyen, de manera sucinta, la regulación de los requisitos de acceso a la administración concursal; el nombramiento de la administración concursal en función de la complejidad de los concursos, y, por tanto, establecimiento de una clasificación de los mismos; y el nuevo régimen de retribución. Así lo recoge la Disposición Final de la ley 16/2022:

Disposición final decimotercera. Reglamento de la administración concursal.

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aprobará mediante real decreto el Reglamento de la administración concursal, en el que se establecerá el acceso a la actividad, el nombramiento de los administradores concursales y su retribución.

Ahora bien, este desarrollo pretendido no puede entenderse sin el desarrollo que, del mismo modo, ha de producirse del Registro Público Concursal, pues la Disposición final decimocuarta de la misma ley 16/2022 dispone:

Disposición final decimocuarta. Reglamento del Registro público concursal.

1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará mediante real decreto la reforma del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro público concursal, en materia de estructura, contenido y sistema de publicidad, así como los procedimientos de inserción y de acceso a este registro y la interconexión con la plataforma europea.

2. El real decreto contemplará las condiciones para la publicación de las retribuciones fijadas para el administrador concursal en cada procedimiento en el que resulte designado.

Pues bien, a la vista de la regulación pretendida en el Proyecto que ahora se informa, esta Agencia considera que son de aplicación los criterios ya emitidos en el Informe 071/2023, en relación con el Proyecto de Real Decreto que regula el Reglamento del Registro público concursal que fue solicitado de manera separada del presente.

Sin perjuicio de que, por supuesto, en la regulación que se deriva del presente proyecto de desarrollo de la Administración concursal se dan tratamientos de datos personales, no se advierte en su regulación ninguna cuestión a destacar desde la perspectiva de la normativa que regula esta cuestión específica que no se hubieran ya puesto de manifiesto al tratar la inscripción de los administradores concursales en la sección 4ª del Registro Público concursal en nuestro Informe 71/2023, que se da aquí por reproducido, especialmente su epígrafe XI.

Se sugiere, en cualquier caso, una mención en el presente proyecto a que los tratamientos de datos personales en los distintos supuestos que se contemplan (comunicación de las listas de administradores a los juzgados, publicación en el BOE de los declarados aptos en el examen de aptitud profesional para ser administrador concursal, etc.) habrán de cumplir la normativa de protección de datos personales (RGPD y LOPDGDD).